



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Claudia Yanneth Echeverri Ruiz
DEMANDADO	Itaú CorpBanca Colombia S.A.
RADICADO	05-001-31-05-014-2015-00882
TEMA	Apelación de las costas procesales
DECISIÓN	Modifica auto recurrido.

El veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, dentro del proceso ordinario, promovido por **CLAUDIA YANNETH ECHEVERRI RUIZ** contra **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.**, procede a resolver lo pertinente.

A continuación, se toma la decisión correspondiente mediante providencia interlocutoria, según acta de discusión de proyectos **Nº 185**, aprobada por los integrantes de la Sala.

Llegó el auto a este Tribunal para conocer del recurso de apelación formulado por el apoderado de la demandante, contra la decisión tomada por el Juzgado Decimocuarto Laboral del Circuito de Medellín, el 3 de junio de 2022, mediante el cual liquidó las costas procesales por un valor total de **\$17'650.420** a cargo de **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.**

- APELACIÓN:**

Para la sustentación del recurso el apoderado de la parte demandante expresó que el juzgado al liquidar las costas y agencias en derecho en la suma de \$7'812.420, liquidó muy inferior a los lineamientos traídos por el acuerdo 1887 de 2003. Que las condenas impuestas en primera instancia, fueron confirmadas por el Tribunal, y a su vez, la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia. Que realizadas las cuentas la suma adeudada asciende a \$167.280.000, tan solo por salarios, sin incluir los reajustes de las prestaciones legales y extralegales. Que las agencias en derecho señaladas por el Despacho, no se corresponden con la liquidación de las condenas impuestas. Que se debe tener en cuenta la naturaleza del proceso, y las

actuaciones de cada una de las instancias, pudiéndose señalar el máximo porcentaje, que corresponde al 25% sobre el valor de la liquidación total de las condenas impuestas. Que se debió tener en cuenta que el proceso duró 7 años en resolverse, agotando todas las etapas procesales. Por lo que solicita modificar las agencias en derecho.

- **ALEGATOS:**

Una vez transcurrido el término de traslado para presentar alegatos, ninguna de las partes hizo manifestación alguna.

Al respecto el Tribunal hace las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para resolver la inconformidad presentada, lo primero que debe señalarse, es que las **expensas judiciales** – entendidas éstas como los gastos necesarios para el trámite del juicio - (honorarios de peritos, copias, diligencias que deban llevarse a cabo por fuera del Despacho Judicial) y las **agencias en derecho** – dinero que se adeuda por los gastos en que incurrió la parte triunfante de un proceso con la contratación del profesional que defendió sus intereses – (honorarios), hacen parte integrante de las **costas procesales**, lo cual constituyen en erogaciones que debe cubrir la parte vencida en el proceso.

Igualmente, las agencias en derecho *“representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses”* y es *“el juez quien, de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393 – 3 – del Código de Procedimiento Civil... Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado...”*¹ (Negrilla de la Sala).

Por su parte, el artículo 366 -4- del Código General del Proceso, indica que para la fijación de agencias en derecho se consultará las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Determina, igualmente, que si *“...éstas solamente establecen un mínimo, o éste o un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la*

¹ Sentencia de la Corte Constitucional C-539 del 28 de julio de 1999

parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de esas tarifas...”

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, como correctamente lo manifiesta el apoderado de la parte demandante, se deben fijar las costas procesales con los parámetros del decreto 1887 de 2003, y, por tanto, se debe enmarcar en las pautas que trae la “tarifa de honorarios del Consejo Superior de la Judicatura”, que reza, en su artículo 6° numeral 2.1.1., lo siguiente:

(...)

“Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

(...)

El **caso objeto de estudio**, se trató de un proceso ordinario laboral, en el que el juzgado catorce laboral del circuito de Medellín, a través de sentencia proferida el 20 de noviembre de 2018, resolvió condenar a ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. a reconocer y pagar a la señora CLAUDIA YANNETH ECHEVERRI RUIZ, la nivelación salarial causada desde el 17 de junio de 2012, ateniendo la remuneración salarial que devengaba el señor OSWALDO MARQUEZ CEBALLOS, ordenando asimismo el reajuste salarial, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social; decisión ésta que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante providencia del 22 de septiembre de 2020, y que al interponerse el recurso extraordinario de casación, la misma no fue casada.

Ahora, no pasa por alto la Sala, que la condena impuesta a la accionada fue una obligación no periódica, la cual no fue estimada en las sentencias, sin embargo, no desconoce la Sala, que la parte demandante adelantó todas las gestiones necesarias para el reconocimiento de la nivelación salarial y el reajuste de todas sus acreencias laborales, pretensiones que como se dijo, salieron adelante.

Si bien el juez de la primera instancia tasó las agencias en derecho de la primera instancia en la suma de \$7'812.420, que equivalen aproximadamente a 8 salarios mínimo legales mensuales vigentes para el año 2022, esto se debe a que no se tiene una condena en concreto para cuantificar el porcentaje del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia; sin embargo, esta Sala de Decisión al efectuarse el estudio para la procedencia de la casación, realizó

una liquidación parcial de todas las condenas arrojando la suma de \$111'213.765, haciendo la claridad que dicho cálculo se liquidó para el año 2021.

Pues bien, la Sala no puede omitir que el decreto 1887 de 2003 establece criterios de carácter **cualitativo** y **cuantitativo** para que el juzgador fije las agencias en derecho, más no se deduce de la interpretación de tales disposiciones que éstas, de manera automática, impongan el valor de dicha erogación, pues simplemente orientan al juez para que, en uso de su discrecionalidad, fije un monto que considere prudente y proporcional con el valor de las condenas por él reconocidas, el tipo de proceso, y la duración y calidad de la gestión que realizó el apoderado en el transcurso del proceso, teniendo como límite el tope máximo fijado por la ley, pero sin que ello signifique que de manera necesaria, el fallador esté condicionado a fijar como agencias el máximo legal.

Así las cosas, encuentra esta judicatura que la gestión realizada por el apoderado de la accionante en el proceso de la referencia fue diligente, donde se aportaron las pruebas necesarias y asistieron a las respectivas audiencias para resolver lo relacionado con la nivelación salarial y el reajuste de las acreencias laborales, proceso además que tuvo una duración aproximada de 6 años y 11 meses.

Por lo anterior, considera la Sala que, al ser todas las actuaciones de la parte actora acuciosas, se hace necesario **MODIFICAR** el valor de las agencias en derecho de la primera instancia e imponer por tal concepto la suma de **\$11'121.376**, que corresponde a un porcentaje del 10% de la liquidación que se efectuó en su momento para conceder el recurso de casación; así pues, esta cifra dada, sumada a la liquidada en segunda instancia por valor de \$438.000 y a la otorgada en casación de \$9'400.000, arroja un valor de costas totales a cargo de ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. de **\$20'959.376**.

En conclusión y sin necesidad de más consideraciones al respecto, se **MODIFICARÁ** el auto recurrido por las razones que se han dejado consignadas.

Sin costas procesales en el recurso.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **MODIFICA** el auto recurrido que se revisa por vía de apelación, de fecha y procedencia conocidas, en cuanto al valor total por costas procesales, imponiendo por tal concepto la suma de **\$20'959.376**, a cargo de ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A., y en favor de la parte actora.

SEGUNDO: Sin costas procesales en el recurso.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,


GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 133 del 1° de agosto de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>